


Retrovisor
Ivonne Melgar

ivonne.melgar@gimtn.com.mx



Huachicol fiscal, T-MEC y narcopolítica

• El huachicol no podría operar sin la complicidad de funcionarios y trabajadores.

Lo que sabemos de la llamada presidencial del jueves confirma que, en la relación con Estados Unidos, el T-MEC y “la lucha contra el narcotráfico” —palabras de **Trump**— van en paquete.

Así que México necesita resolver asuntos de crimen organizado y corrupción que, como el huachicol fiscal, importan a su socio comercial.

Con una carpeta de investigación penal de 20 tomos en la Fiscalía General de la República (FGR), el caso obliga a desmontar una red de contrabando de combustible que habría corrompido a funcionarios de Marina y aduanales, al menos.

Y es por el presunto involucramiento de servidores públicos y personajes políticos que este 26 de enero, en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, su aún presidenta, **Vania Pérez Morales**, propuso abordar el tema del huachicol fiscal.

Sin embargo, la fiscal anticorrupción de la FGR, **María de la Luz Mijangos**; la magistrada **Eva de Gylvés Zárate**, del Tribunal de Disciplina Judicial, y **José Ramón Amieva**, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, votaron por realizar un estudio técnico sobre las conductas involucradas, a fin de valorar si puede considerarse un caso de corrupción o se trata sólo de crimen organizado.

A esa reunión extraordinaria no acudieron la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, **Raquel Buenrostro**, ni el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), **David Colmenares**, quienes mucho podrían aportar sobre un entramado que le robó al erario unos 600 mil millones de pesos.

Pese a esas ausencias, en esta última sesión de la presidenta **Vania Pérez** —que concluyó su gestión como comisionada ciudadana el día 28— se hizo el compromiso de profundizar en los análisis del SNA que definen al huachicol fiscal como “un fenómeno de corrupción en cuyo *modus operandi* concurren una multiplicidad de actores, actos y delitos”.

De manera que, aun cuando la presidencia del Sistema por ahora se encuentra acéfala, quedó ahí la tarea suscrita por la fiscal **Mijangos** y los magistrados **Amieva** y **De Gylvés**, afines a Palacio Nacional, sin duda, pero —dada su *expertise*— muy conscientes del daño que la opacidad le hace a la sociedad, al Estado y a sus responsables.

El freno a la propuesta de **Vania Pérez** —de hacerle un exhorto a la administración federal para que rindiera cuentas del caso— podría circunscribirse en el cuidado que el gobierno tiene para que el huachicol fiscal no salpique a cercanos al expresidente **Andrés Manuel López Obrador**

y altamente sensibles para la marca Morena. Pero el tema sigue embarrándolos.

Apenas ayer, en la conferencia mañanera, realizada en Tijuana, la presidenta **Claudia Sheinbaum** fue interrogada por el *Semanario Zeta* sobre los presuntos nexos con la red del huachicol de **Carlos Torres**, exesposo de la gobernadora **Marina del Pilar Ávila**, ahí presente.

Son señalamientos que reviven el antecedente de la cancelación de la visa estadounidense por razones aún no conocidas.

Y aunque la respuesta reiterada de la presidenta **Sheinbaum** fue que ése es un asunto de la FGR y que la mandataria estatal cuenta con su respaldo, en la conferencia nadie negó el nexo huachicolero del excoordinador de proyectos especiales. De manera que, de ser cierto el vínculo, ahí habría, además de crimen organizado, corrupción por parte de **Torres**.

Por eso, hay que poner atención en la alerta que ventiloó en su informe final **Vania Pérez** respecto a la importancia que para la ratificación del T-MEC tendría el incumplimiento de México del Artículo 27: “las instituciones mexicanas deberían fortalecerse en materia de combate a la corrupción y de transparencia. Y esto no ha pasado; por el contrario, se han debilitado”.

En la Nota Técnica del Sistema Nacional Anticorrupción —con el que se sustentaría el exhorto— se indica que el huachicol fiscal es hoy un asunto de seguridad nacional para EU, superando al fentanilo como tema principal en el intercambio de inteligencia y de negociaciones bilaterales, porque constituye “una trama

en la que participan comercializadoras, agentes aduanales, gasolineros, autoridades e integrantes del crimen organizado internacional”.

En ese documento del SNA se concluye que el huachicol no podría operar sin la complicidad de funcionarios y trabajadores de Pemex ni la connivencia de autoridades de aduanas y puertos.

Y se plantea en la Nota Técnica que, como cada golpe contra las redes de huachicol involucra a figuras cercanas al partido gobernante, enfrentarlas tendrá un costo político.

Pero, a juzgar por lo dicho y hecho esta semana, la Presidenta no está dispuesta a lastimar la relación con **Trump**.

Y cuidar esa relación significará, más temprano que tarde, dar “resultados concretos y verificables” (la petición de hace dos semanas de **Marco Rubio**, secretario de Estado) en el enfrentamiento al crimen organizado, con los huachicoleros incluidos.

Los funcionarios son conscientes del daño que la opacidad le hace a la sociedad, al Estado y a sus responsables.